

CONCLUSIONES
ANTE UN FUTURO INCIERTO...

De cara a un futuro incierto...

En primer lugar, parece necesario el precisar que el libro se «pensó» —y de ahí viene su título— partiendo de la hipótesis de que en el mes de enero se había realizado una prueba de fuerza entre dos alternativas políticas bien precisas: la «reforma» que propiciaba el Gobierno —o al menos una parte del mismo— y la «ruptura», en tanto fórmula política de una oposición concertada en dos pactos democráticos principalmente (la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática). Esta hipótesis se formuló en los últimos días de enero sobre la información general aparecida en el mes y tomando como base o antecedentes el análisis efectuado por E. D. E. en el primer libro de esta colección «Lucha política por el Poder». Esta es la razón de que se planificara el trabajo de los equipos y aún su misma composición, sobre dos partes bien definidas:

- La primera que ofrecería un marco general de la prueba de fuerza en cuatro capítulos: el político, el económico, el conflictivo general y el que abordaría los aspectos internacionales.
- La segunda, dedicada a Madrid, ya que en la información de enero aparecía Madrid como el escenario específico de la prueba de fuerza en sus dos puntos más importantes: el ensayo de huelga general y el ensayo de movilización ciudadana en la manifestación del día 20.

Debido al acuerdo de que al análisis se incorporarían, se irían incorporando, a la información ya sistematizada del mes de enero, los elementos más importantes que fueran apareciendo durante el tiempo de su realización, es decir el mes de febrero, nos hemos

encontrado con que han ido surgiendo elementos e indicadores nuevos que apuntan hacia una dinámica que a finales de enero no era previsible —al menos para nosotros—, dinámica que desplaza no sólo el centro de gravedad de la prueba de fuerza de Madrid a otros lugares, sino también a otras alternativas más radicales que las previstas en la hipótesis previa.

En segundo lugar» y antes de entrar en el análisis general que nos proponemos, nos interesa hacer constar que sin perjuicio de las distintas tendencias existentes en las diferentes personas que han intervenido en el trabajo, el compromiso previo de los equipos de tratar de analizar los datos y la información sin «perjuicio» y de sacar conclusiones sin ajustarlas a tácticas o estrategias, aunque éstas esuvieran «justificadas» o legitimadas por los objetivos que se pretendían y éstos fueran «objetivamente» merecedores de todo nuestro aplauso, ha sido cumplido por todos. Esto supone un acuerdo previo y «compartido, que constituye la esencia de la labor que se ha impuesto E. D. E., que consiste en la absoluta necesidad de que en los trabajos de análisis y de crítica no se interfieran razones de «oportunidad» que silencien los errores. Porque el pretendido, y tantas veces utilizado, argumento de que el decir las cosas como son «favorece al enemigo», puede servir a la derecha política, pero no a quienes nos situamos en la izquierda y pretendemos sustituir la ideología legitimadora del poder por el conocimiento, para que el poder —cualquier poder— en la dinámica de la lucha, vaya desapareciendo al desaparecer el proceso de explotación económica al que se debe; y no sea el poder conquistado nueva causa de un nuevo proceso de privilegio y de desigualdad.

Si en nuestro trabajo ponemos, en ocasiones, en evidencia errores cometidos por fuerzas políticas que se encuentran comprometidas en la misma lucha a largo plazo que la que nos anima, y avanzamos opiniones no coincidentes, y criticamos sus tácticas o sus acciones, lo hacemos por estimar que tal ejercicio es precisamente definidor de la «izquierda», como es definidor de la «derecha» su contrario: la legitimación ideológica del poder para encubrirlo con apelaciones a la «unidad» y a otros valores ideológicos transcendentales.

Existen en los dos meses que comprenden el análisis (enero y febrero), una serie de indicadores que señalan una progresiva modificación en la alternativa política que supone la «reforma».

El más espectacular de estos indicadores es sin duda el que marca la diferencia de comportamiento de las «fuerzas de orden público», desde los primeros días del período en el que la cortesía ante los

manifestantes era la «regla» y la excepción, la intervención violenta, hasta la forma de actuación en los últimos días.

Pero al lado de este indicador, existen otros igualmente significativos que marcan un indudable endurecimiento de la posición no sólo del Gobierno, sino también, dentro del mismo, del ministro de Gobernación y vicepresidente del Interior, Fraga Iribarne, cabeza visible del proyecto reformista. Basta para comprenderlo haber escuchado y «visto» sus declaraciones en la Televisión en el espacio «El Gobierno informa».

En el fondo, pensamos, que en estos dos meses hay un cambio importante en la alternativa «reforma». En el proyecto, la reforma se articulaba sobre el «pacto» o los pactos; en estos momentos se articula sobre la concesión unilateral desde el poder, sobre el otorgamiento, sobre la imposición a la derecha, imposición, sobre todo, a la izquierda. La cuestión es grave pues afecta a la esencia misma de la alternativa de poder en que consistió la «reforma» como alternativa distinta al «continuismo evolucionista» del Presidente Arias.

Tratando de comprender las causas de este cambio, cambio que puede apreciarse incluso a nivel internacional en la medida en que si la «reforma» surge en principio con un propósito de «homologación» con los regímenes occidentales europeos, sin embargo la primera acción importante en este campo consiste en la firma del tratado con U. S. A. (que contrasta con el planteamiento de la integración en el Mercado Común como una operación a largo plazo), nos parece evidente que si bien la formación del Gobierno presidido por Arias y «vicepresidido» por Fraga, representó la materialización del primer pacto de la reforma —tanto si fue expreso como si no lo fue—, que era necesario establecer con el continuismo evolucionista representado por el Presidente, no fue acompañado por el pacto político con la oposición al «régimen» y así el primer paso de la reforma quedó descompensado y en mal equilibrio para dar los siguientes.

Por otra parte, y viendo las cosas fríamente y aun desde la racionalidad misma de la alternativa reformista, se observan en su intento de realización dos errores de bulto que pueden poner en peligro la totalidad del proyecto y llevar el agua de los acontecimientos políticos al molino del inmovilismo más anacrónico.

Uno es error de análisis, el otro es error de previsión y de optimismo. La alternativa reformista al tomar cuerpo en la opción política «centrista», traslada a la alternativa los presupuestos sociológicos en los que se basa el centrismo y parte del supuesto de que será apoyado por unas *clases medias* nacidas del desarrollo de los años sesenta, por grupos numerosos de trabajadores promocionados

y esperanzados en sucesivas promociones debidas al desarrollo capitalista, por una masa de población mayoritaria que desea seguir viviendo bien y mejorar cada día y que hará una función política estabilizadora y de orden, frente al descontento de los extremos. Lo equivocado del análisis —ya lo hicimos notar en otras ocasiones— es que tales clases medias, no existen en tanto clases, sino que son sencillamente «estratos» de población cuyos comportamientos —aún los políticos —se deben, no a su condición de clase (posición que ocupan en las relaciones de producción), sino a unas cuantas variantes y expectativas de movilidad social (tal como la capacidad de consumo) que son muy sensibles a la coyuntura económica y esta coyuntura en el comienzo de 1976 es negra, por no decir negrísima. Lo que quizá pudo ser cierto en los años sesenta —el apoyo político estabilizador de estos estratos—, no lo es en plena crisis económica y vemos y es de suponer que también lo vea el centrismo con un cierto asombro— cómo hoy las famosas «clases medias» se agitan y protestan, creando problemas a la política del Gobierno, en lugar de prestarle su apoyo y de darle su confianza para que lleve adelante su reforma. Hoy probablemente el fenómeno político más espectacular se está produciendo en que esta base teórica del «centrismo» se escapa hacia posiciones distintas. Las capas medias se politizan pero lo hacen en las filas del socialismo y aún del comunismo y en algunas minorías hasta en la extrema derecha abandonando las tranquilas aguas de la conformidad que les exige la posición centrista. El segundo error de la reforma, probablemente muy condicionado por su único pacto con el continuismo evolucionista, es el haber apresuradamente excluido del futuro legal al Partido Comunista —esto, insistimos, lo decimos desde su propia racionalidad—. Este es un error de previsión y de optimismo, por cuanto que ello es sólo concebible si se piensa (como se deduce de sus análisis) que la mayor parte de los agentes activos de la producción son «clases medias» y que éstas van a adoptar posturas moderadas y moderadoras.

En la situación actual de crisis económica, el reformismo como alternativa distinta a la ruptura y al continuismo, es decir como proyecto de llegar al «cambio pactado» entre el Régimen y la oposición, sólo puede realizarse sobre un plan económico que ofrezca garantías de salir con rapidez del fondo de la crisis y el acuerdo de unos y de otros de apoyar este plan. Pecó de optimismo o de falta de previsión el Gobierno cuando lanzó a su ministro de Hacienda, Villar Mir, a decir al país y de un modo especial a la clase obrera que había que apretarse el cinturón, pidiéndole con bastante ingenuidad

que se lo apretara voluntariamente, sin haber previamente obtenido el acuerdo de toda la oposición organizada en torno a la ruptura, o al menos habiendo manifestado con seriedad su voluntad de llegar en un plazo no demasiado largo a este acuerdo. En lugar de esto incide el Gobierno en el error político de declarar su decidida voluntad de excluir al Partido Comunista del futuro democrático, siendo este partido uno de los ejes de la ruptura y, probablemente, la fuerza política mejor y más extensamente organizada en esa clase a la que se pide que se apriete el cinturón y sobre la que tiene que descansar el plan económico de salida de la crisis.

De hecho, y lo hemos visto en el conjunto de la información que ofrecemos, cuando desde la alternativa de la ruptura se rompen las hostilidades y se trata de realizar una movilización general en torno a sus objetivos, el éxito es tan sólo relativo y perfectamente controlable por el Gobierno en el nivel político y aún en la movilización ciudadana; pero el éxito lo obtiene de manera bastante clara en la lucha contra la medida económica de la congelación de salarios y aún en el permanente hostigamiento al aparato productivo, haciendo más difícil la salida de la crisis y aún obligando al Gobierno a cambiar sus presupuestos de política económica.

Si una cosa ha quedado clara, en los dos meses transcurridos de luchas económicas generalizadas, es que los «productores» no están muy dispuestos a apoyar la política económica del Gobierno y que éste no obtendrá la tregua en el terreno económico.

A partir de los últimos indicadores de los conflictos —en centros ya desplazados de Madrid y de su conflicto del mes de enero— queda claro que no sólo el pacto social, suspirado en torno a un proyecto de recuperación económica, no parece posible ni cercano, sino que también puede romperse, o al menos dañarse de forma grave el «acuerdo productivo». Llamamos acuerdo productivo, para distinguirlo de pacto social, al que mínimamente se establece entre empresas y obreros para que la producción no se interrumpa por períodos excesivamente largos que pongan en peligro la existencia económica misma de las empresas, acuerdos pactados por períodos y revisables al final de los mismos.

Si la conflictividad laboral se endurece y se alarga en una batalla de permanente hostigamiento, y se entra en una dinámica represiva —y no de pacto— para terminar con los conflictos, es posible que éstos se ahoguen y se terminen, pero también es seguro que la reforma habrá dejado de existir como alternativa distinta al continuismo. Será éste, cuando no el inmovilismo más anacrónico, el que

continuará en solitario desde el poder su camino hacia la segunda y más grave secudida de la crisis.

Pero el reformismo, en cuanto alternativa independiente del centrismo y de las figuras que hoy lo protagonizan, es una de las dos alternativas posibles del capitalismo en cuanto sistema económico que precisa en el país una forma de poder de democracia formal para su próxima etapa de desarrollo. La otra es sin duda «la ruptura», es decir la alternativa representada por las fuerzas unidas por los pactos interclases de ruptura democrática. El punto de partida del análisis es la hipótesis de que el capitalismo español —o al menos partes importantes y probablemente hegemónicas de este capitalismo necesita, para poder salir de la crisis que le amenaza, el pacto social o, por lo menos, una cierta estabilidad en los acuerdos productivos, que éstos no estén permanentemente amenazados por una conflictividad de hostigamiento y que este pacto social o la mínima estabilidad en los acuerdos productivos, precisa en la situación actual un marco político democrático formal dentro del contexto europeo occidental.

Nos parece evidente que la alternativa reformista responde a estas exigencias y a estos intereses, siempre que se mantenga en su verdadero contenido de «reforma pactada» y no se transforme en «reforma impuesta y otorgada», es decir, en continuismo evolucionista, ya que tal alternativa es por su esencia el «no pacto» y es precisamente el «pacto» lo que hoy reclaman los intereses capitalistas.

Si los errores ya señalados del «reformismo» animado por el centrismo de Fraga, hacen imposible la alternativa reformista, el futuro político del centrismo —aunque adopte la organización de partido y tal parece ser la intención de G. O. T. S. A. al promover al grupo «Reforma Democrática»— es bastante negro, ya que el capitalismo —a medida que avance la crisis económica y se agudice el proceso y la dureza de la conflictividad en el campo productivo y la dinámica represiva como única respuesta— empezará a plantearse seriamente su segunda alternativa «la ruptura». Cosa que, creemos, hasta el momento no 'ha hecho.

Parece poco probable —salvo que la dinámica de la crisis tome el camino que más tarde examinaremos— que el capitalismo opte —si le dejan— por apoyar la solución o alternativa continuista a la que derivará la reforma si no rectifica sus errores.

Pero la ruptura, como alternativa capitalista de la reforma, también se presenta problemática y no exenta de dificultades y de posibles errores políticos.

Todas las informaciones que hemos manejado, y que de forma sistemática hemos procurado trasladar a este trabajo, nos muestran que hoy por hoy esta alternativa en el nivel político descansa sobre los pactos Junta y Plataforma, más sobre el primero que sobre el segundo, y dentro del primero sobre la presencia y el activismo del Partido Comunista.

A nivel de movilizaciones de masas, —ya que no existen otros cauces en los que puedan medir sus fuerzas las dos alternativas actuales (la reforma y la ruptura)—, la ruptura ha alcanzado su apoyo más seguro en dos ejes de movilización: la lucha económica de los trabajadores contra la política del Gobierno de congelación de salarios, a través de conflictos generalizados y escalonados por ramas y zonas, y la lucha ciudadana en una doble vertiente: la lucha de los barrios por sus problemas locales a través de las asociaciones de vecinos, y las manifestaciones populares en favor de la amnistía y de las libertades democráticas. En ambos ejes movilizados (la lucha obrera y movilización ciudadana) la presencia de las clases capitalistas ha brillado por su ausencia y el protagonismo ha sido de los asalariados, de los estudiantes y de las mujeres, afectadas por la carestía de vida; y la dirección política de tales movilizaciones —si es que ha habido alguna y en la medida en la que la ha habido— ha sido una dirección de los grupos de izquierda y dentro de éstos todo parece indicar que el que se ha encontrado en una posición dominante ha sido el Partido Comunista.

Es cierto que en los pactos en los que se materializa la alternativa «ruptura», existen fuerzas políticas que en sus programas presentan un amplio abanico y que en algunos de ellos tendrían cabida los intereses capitalistas, pero hoy por hoy, estos grupos no tienen una clientela de clase, ni son capaces de movilizar a sus clientelas potenciales. Precisamente por ello la alternativa «ruptura» como alternativa que no supera la solución capitalista, se encuentra descompensada.

En esta situación, la alternativa ruptura más que un pacto interclase, frente al continuismo del Régimen que es el «no pacto», es un proyecto de pacto que presentan, a la clase capitalista, fuerzas bastante aceptablemente representativas de la clase obrera. En este pacto existen unas condiciones mínimas de carácter político, tal como la legalización de todos los partidos, la formación de un Gobierno Provisional y la apertura de un período constituyente.

De esta forma podemos llegar a la conclusión de que los que se encuentran frente a frente en esta prueba de fuerza entre la reforma y la ruptura, son exactamente dos proyectos de pacto, con

contenidos interclase casi idénticos; uno que lo realiza el centrismo desde el Gobierno y otro que lo realiza la izquierda desde la oposición, aunque en cada uno existen condiciones y objetivos diferentes.

Ciertas informaciones indican que por parte de la alternativa «ruptura» se llegarían a modificar algunas de las condiciones (tal como la de Gobierno Provisional, sustituyéndolo por Gobierno de reconciliación o concentración nacional) que permitiese una «salida» a la «reforma», siempre que se aceptase la legalización de todos los partidos, es decir que se suprimiese por parte de la «reforma» la exclusión del Partido Comunista.

En el nivel político, la cuestión está ahí, pero las cartas se juegan en el fondo de una crisis económica y en un terreno no demasiado cómodo para los dirigentes políticos. Del mismo modo que para la reforma, para la izquierda que propone el pacto le es muy peligroso equivocarse en ese terreno de juego. Los últimos acontecimientos de la lucha laboral nos llevan al análisis de esas posibles equivocaciones.

Para esta izquierda que ha colocado, en su caminar estratégico, el paso previo a la democracia formal y que propone a sus enemigos de clase el pacto de ruptura como alternativa distinta al pacto reformista del centrismo, le es importante, esencialmente importante, el respaldo de la movilización popular y todavía más la presencia disciplinada de la clase obrera. Para los capitalistas, el pacto político con la izquierda no tiene sentido si no permite el pacto social y si no comprende el acuerdo productivo como situación normal y la lucha en este terreno como lo excepcional y esporádico. En este supuesto, a la izquierda, si quiere forzar el pacto político, le interesa condicionar el pacto social y el acuerdo productivo al pacto político, manteniendo hasta ese momento su contrario, es decir, una etapa de ruptura a nivel productivo, y de no aceptación de la política económica capitalista mediante la lucha contra la congelación de los salarios. Pero, al propio tiempo, le interesa demostrar a sus potenciales aliados tácticos su capacidad de movilización obrera y su «saber hacer» en el momento en que es preciso terminar con las huelgas si se llega a acuerdos, su posición, en fin, de interlocutores válidos y únicos representantes de la clase obrera. La movilización y la desmovilización, en la actual etapa del enfrentamiento entre las dos alternativas, pertenecen claramente a los objetivos políticos coyunturales de la izquierda promotora del pacto.

Hasta aquí, todo parece claro y en orden dentro de la lógica de la estrategia adoptada por los partidos de la clase obrera que ofrecen al capitalismo un pacto para conseguir la democracia burguesa

como paso previo a las siguientes etapas de la lucha por el poder. El conflicto de Madrid y las luchas generalizadas que se desarrollan en la capital del país durante el mes de enero, responden con gran exactitud a esta línea estratégica o, si se prefiere, a la táctica del momento político que analizamos.

Ahora bien, esta lógica estratégica decidida a niveles políticos, en las «vanguardias», necesita, para que se realice en las fábricas, un proceso de movilización serio y no siempre fácil, sobre todo cuando no existe —o existe a un nivel muy rudimentario— la organización de masas (el sindicato) que sirva de intermediario entre la vanguardia política y la base. El procedimiento tradicional —hoy fuertemente «contestado» desde minorías radicalizadas dentro del movimiento obrero— es que las organizaciones de masas sirvan de «correa de transmisión» en estos procesos de movilización y desmovilización a través de los militantes de la «vanguardia» que actúan, generalmente en posiciones dirigentes, en estas organizaciones de masas.

En el paro generalizado de Madrid que ha sido objeto de análisis, aparece que "en la etapa de movilización" fueron sobre todo las asambleas de trabajadores y las motivaciones económicas —especialmente los convenios— el instrumento utilizado para llegar a las decisiones de paro. Las «vanguardias», en general, no sólo las que propiciaban el pacto, encontraron un terreno abonado en la clase por la crisis económica y por la impopularidad lograda por las medidas económicas y por la misma forma en que fueron propuestas y anunciadas por el Gobierno, y puede afirmarse que el objetivo político de la movilización coincidía con la disposición de la base a dar la batalla por los aumentos de salarios. Las asambleas en este momento —creemos— fueron verdaderamente democráticas y fue la opinión mayoritaria de los trabajadores la que decidió el paro en la totalidad de los casos.

Sin embargo, en esta etapa estimamos que faltó, por parte de las «vanguardias» asentadas en las fábricas, un trabajo de explicación política de la estrategia de movilización como estrategia global y política de cara al pacto y distinta a los objetivos inmediatos movilizados de tipo predominantemente económicos, para que la base comprendiera y asumiera la posibilidad de que aquéllos objetivos políticos, hoy coincidentes, pudieran entrar en contradicción con los económicos en otro momento del conflicto, para que de esta forma en esas asambleas —que todos reconocen como soberanas— se pudiera decidir con conocimiento de causa y teniendo en cuenta las opciones políticas en juego el momento y la oportunidad de la termi-

nación del conflicto. En definitiva, en la segunda etapa del conflicto el continuar o terminar el conflicto se planteaba en el nivel político entre la alternativa del pacto y otra alternativa más «radicalizada» que negaba y denunciaba el mismo, tratando de llevar la lucha a un enfrentamiento directo entre las clases antagónicas.

A la hora de la desmovilización, que en la base se resintió como «frenazo», la lucha entre continuar el conflicto o terminarlo mediante acuerdo negociado, no se llevó a las asambleas en sus propios términos de dos opciones políticas distintas que correspondían a dos líneas estratégicas diferentes e incompatibles, sino que por los que proponían el acuerdo su necesidad se razonó con argumentos distintos, tales como el que se había ya ganado la huelga por haberse roto el tope salarial, el cansancio de la clase obrera, etc., y por los que propiciaban la continuación, en forma de denuncia del frenazo como de abandono, utilizando argumentos de acusación de «revisionismo» a sus contrarios, cuando no de traición a la clase, pero sin explicar sus posiciones estratégicas de manera clara y referidas al momento actual. Al final del conflicto —y al lado de sus aspectos y logros más positivos— queda para la base un saldo negativo al constatar una vez más la ya endémica división entre las «vanguardias» y que las decisiones que se proponían en las asambleas (y que en definitiva se aprobaban por éstas) habían sido previamente elaboradas, discutidas, y decididas, a otros niveles, sin que se trasladara a las asambleas las razones que en esos niveles se tuvieron en cuenta para adoptarlas.

A esto, pronto se añadió, o se va añadiendo, una cierta duda sobre el éxito- económico de la huelga, éxito proclamado por los partidarios del acuerdo en la rápida etapa de negociación con la que se termina. No sólo porque la medida de devaluación de la peseta, y las probables subidas de precios, que serán sus consecuencias, cuestionan en general los aumentos lineales conseguidos, sino también y sobre todo, porque en muchos casos las subidas acordadas son provisionales hasta tanto se firme el convenio, y las negociaciones de convenio no tienen porqué, necesariamente, llegar al acuerdo ni incluir las subidas provisionales, sino que, como en el caso de la Standard (y no se olvide que esta empresa ha sido punta en el conflicto), puede no llegarse al acuerdo y en tal situación la discordia se zanja con un laudo y en este laudo puede concederse menos que lo que la propia empresa ofrece, ajustando la subida al tope salarial que trató de romperse y que según se dijo se había ya roto como resultado de la huelga. Y esto ocurre cuando los trabajadores están

ya desmovilizados y cuando los aspectos negativos apuntados han producido en la base un descontento y una frustración evidentes.

Parece cierto que en tales circunstancias —para nosotros errores graves de las «vanguardias» que propiciaron el pacto— pueden producir un deslizamiento de la opinión de las bases hacia posiciones críticas y radicales, si es que no llegan a producir una desmovilización más profunda que la que se pretendía.

En el desarrollo de las huelgas y en su desplazamiento desde Madrid a otras ciudades y regiones y en la radicalización que aquí y allá va apareciendo, se observan, quizá, los primeros efectos de estos errores.

Si el error de la «reforma» en esta primera etapa del enfrentamiento ha sido no haber comprendido la necesidad de incluir en el pacto propuesto al Partido Comunista, el error de la izquierda, promotora del pacto de la ruptura, estimamos que ha sido el no contar con la capacidad de la base trabajadora, a la que quieren representar, de comprender sus problemas de clase y de tomar en las asambleas sus decisiones con todo conocimiento de causa.

La prueba de fuerza entre la reforma y la ruptura ha tenido un epílogo dramático en las barricadas de las calles de Vitoria, y es justo que nos preguntemos si se trata realmente de un epílogo o, quizá, de un prólogo...

